

## Boletín



## Oficial

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

SE PUBLICA los martes, jueves y sábados de cada semana.

SE SUSCRIBE en esta capital, Imprenta de D. Francisco Paz, Fuente del Rey núm. 18.

En las demas provincias, en las principales librerías.

PRECIOS DE SUSCRICION, en Orense, por trimestre, 2 ESCUDOS.

—Para fuera de esta capital, franco de porte por trimestres adelantados, 3 ESCUDOS.

—Números sueltos, 150 MILÉSIMAS.

## GOBIERNO DE PROVINCIA.

## Circulares.

Resolviendo á quien corresponde el nombramiento y separacion de los Peatones conductores de la correspondencia pública y los Carteros que cobran sus haberes con cargo al presupuesto general del Estado.

## Comunicaciones Correos —Negociado 1.º

La Direccion general de Comunicaciones en 25 de junio próximo pasado me dice lo que sigue:

Visto el expediente instruido en este Centro directivo á consecuencia de los oficios dirigidos por varios Gobernadores, Jefes de Seccion de Comunicaciones de las provincias y Alcaldes, dando cuenta de las alteraciones que hacen en el personal de Peatones y Carteros de sus respectivas jurisdicciones:

Vistas las consultas que continuamente se hacen por los segundos de dichos funcionarios, sobre á qué autoridad corresponde la facultad de nombrar los Peatones y Carteros á quienes se satisfacen sus haberes con cargo al presupuesto general del Estado:

Vistas asimismo las comunicaciones que se dirijen, consultando sobre quien deba ser la autoridad á quien corresponde expedir los títulos á los Peatones y Carteros de la correspondencia pública; solicitando otros los títulos correspondientes de dichos funcionarios; y

Vistas por último las quejas que diferentes autoridades, corporaciones municipales y particulares elevan á esta Direccion sobre que algunas de las plazas citadas las desempeñan personas que no saben leer y escribir y otras por individuos que suelen encomendar este servicio á mugeres y niños:

Considerando que tal vez los abusos que se cometen, consultas y reclamaciones que se hacen, reconocen por principal causa el que dichas autoridades y funcionarios desconozcan las disposiciones que rigen sobre el particular:

Considerando que de continuar aquellos abusos ocurriría en el servicio del ramo una perturbacion que podrá extenderse á otras dependencias del Estado encargadas de llevar y revisar las cuentas de aquel personal; esta Direccion general, de conformidad con lo dispuesto por la Real orden de 4 de febrero de 1865 y circular de la Direccion general de Correos de la misma fecha, hoy vigente, ha resuelto dictar las reglas siguientes:

1.º Que solo á este Centro directivo corresponde el nombramiento y separacion de los Peatones, conductores de la correspondencia pública, y á los Carteros que cobran sus haberes con cargo al presupuesto general del Estado.

2.º Que los Jefes de Seccion de Comunicaciones en las provincias propondrán á esta Direccion general los cambios que en el personal de aquellos funcionarios exija el mejor servicio del ramo, recayendo siempre que sea posible en cesantes de iguales cargos ó licenciados del ejército que sepan leer y escribir.

3.º Luego que esta Direccion comunique á los Gobernadores civiles los nombramientos de Peatones y Carteros, expedirán á los interesados el título que previenen las instrucciones vigentes.

4.º Los Jefes de Seccion de Comunicaciones diligenciarán los títulos y remitirán una copia á la Ordenacion general de pagos de este Mi-

nisterio, avisando tambien á dicha dependencia y á este Centro el dia del cese y el de la toma de posesion de los nombrados.

Y 5.º Los Gobernadores y Jefes de Comunicaciones cuidarán, bajo su mas estrecha responsabilidad, de evitar que las personas nombradas para ejercer los destinos de Peatones y Carteros cedan su cargo á otras sin conocimiento ni autorizacion de sus inmediatos Jefes, los cuales podrán permitirlo, cuando causas justificadas les precise á ello, procurando que los individuos que les sustituyan reúnan, si es posible, las condiciones prevenidas en la circular de la Direccion general de Correos de 4 de febrero de 1865, ya citada, no tolerando de ningun modo ni por un momento que sean reemplazados por mugeres y niños, interponiendo al efecto cuantos medios les sugiera su celo y estén á su alcance para el mejor cumplimiento de lo que se previene en la presente circular, á fin de corregir los males que se lamentan en el servicio indicado.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Lo que se hace público por medio de este periódico oficial para los efectos que puedan convenir. Orense julio 22 de 1869.—El Gobernador, Alejandro G. Olivares.

Se recomienda á los Sres. Alcaldes noticién el punto de existencia de los herederos del soldado que se expresa.

R. dencion y enganches.—Negociado 5.º

Habiendo fallecido Juan Ventosela y Romero, soldado del regimiento infantería de Cuenca número 27, hijo de Juan y de Andrea, natural de Tabande parroquia de S. Martin,

pueblo que se dice ser de esta provincia; el Consejo de Gobierno y Administracion del fondo de redencion y enganches del servicio militar, pide noticia de la existencia de los herederos de aquel, con objeto de proceder á abonarles sus alcances.

Lo que se hace público para que en el término de ocho dias, el señor Alcalde á quien corresponda avise á este Gobierno de la existencia de aquellos, aceptándose tambien el aviso por parte de los mismos interesados. Orense julio 23 de 1869.—El Gobernador, Alejandro Gonzalez Olivares.

La Direccion general del Tesoro público con fecha 5 de julio, me dice lo siguiente:

En el Sorteo celebrado en este dia para adjudicar el premio de 250 escudos concedido en cada uno á las huérfanas de Militares y patriotas muertos en campaña, ha cabido en suerte dicho premio á D.ª Basilio Casado, hija de don Juan, alguacil mayor de Piedrabuena, muerto en el campo del honor.

Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para que llegue á noticia de la interesada. Orense 28 de julio de 1869.—El Gobernador, Alejandro Gonzalez Olivares.

## DIPUTACION PROVINCIAL DE ORENSE.

## Circular.

A fin de que los ayuntamientos que no han cubierto sus respectivos cupos de quintos, por lo tocante al reemplazo del corriente año, puedan entregar en caja los que les falten, y presentar á la vez ante esta Diputacion los expedientes ó diligencias que la misma ha mandado instruir para resolver las excepciones que se

hallan pendientes de aquella tramitación, se señalará en dicho efecto los días que á continuación se expresan, en los cuales los ayuntamientos remitirán por medio de comisionado no solo los expedientes ó diligencias mencionadas, sino también certificación que acredite el resultado de los expedientes de prófugos, y los mozos necesarios para completar sus contingentes.

AGOSTO.

Día 8.

Los ayuntamientos del partido judicial de Bande  
Id., id., de Carballino.

Día 9.

Id., id., de Celanova.  
Id., id., de Ginzó.

Día 10.

Id., id., de Ribadavia.  
Id., id., de Trives.

Día 11.

Id., id., de Valdeorras.  
Id., id., de Verín.

Día 12.

Id., id., de Orense.

Orense 27 de julio de 1869.—El Presidente, Alejandro González Olivares.—Joaquín Vila-Yañez, Srío.

(Gaceta 1.º Jun. 202.)

## MINISTERIO DE HACIENDA.

### LEYES.

De Francisco Serrano y Domínguez, Regente del Reino por la voluntad de las Cortes Soberanas; á todos los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la Nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

Artículo 1.º Se declaran caducados y extinguidos para siempre todos los créditos contra el Estado cuyo reconocimiento ó liquidación no se haya solicitado dentro de las épocas y plazos que según su origen se les señalaron por las leyes, reales decretos y órdenes vigentes.

Art. 2.º Las disposiciones de esta ley son aplicables desde luego á todos los créditos, sea cualquiera su origen, que el Estado debe abonar con sujeción á las reglas vigentes, y que tengan señalado el modo y forma de proceder á su reconocimiento, liquidación y pago.

Del mismo modo se aplicarán á cualesquiera créditos ulteriores contra la Nación desde el momento en que esos créditos se hallen en iguales circunstancias.

Art. 3.º Incurrirán en la pena de caducidad, quedando extinguidos para siempre, los créditos contra el Estado de cualquier clase y origen, cuyo reconocimiento ó liquidación se haya solicitado en las épocas y plazos señalados al efecto, si los interesados dejan trascurrir el término de un año sin facilitar los datos, noticias e informaciones que las oficinas de la Deuda les reclamen para acreditar su derecho. Este plazo podrá prorogarse á instancia de parte por tres meses, cuando la Junta de la Deuda lo considere equitativo por la importancia de los datos pedidos ó la dificultad de reunirlos.

Pasada esta próruga sin presentarse las justificaciones, noticias ó datos pedidos, el crédito á que el expediente se refiera quedará caducado.

Art. 4.º Los acreedores por el ramo de tratados con la Francia en los años de 1795 á 1815, que reclamaron sus créditos dentro del término legal, presentarán en el término á contar desde la publicación de esta ley y bajo pena de caducidad, las certificaciones que les expidiera la Junta de tratados ó la prueba de extravío si hubieran desaparecido aquellas.

Art. 5.º Los dueños de los créditos procedentes de época anterior á 1.º de mayo de 1828 y reclamados en tiempo hábil, que no hayan entregado los documentos justificativos de los mismos, ó acreditado su extravío en el plazo de un año que señaló para su presentación el art. 41 del reglamento de 17 de octubre de 1851, perderán todo derecho á su abono, y se dará de baja definitivamente su importe en la cuenta de liquidación. Se declararán asimismo comprendidos en la prescripción de que trata el art. 4.º de esta ley los créditos á que se refieren los artículos 39 y 42 del mencionado reglamento si no se hubiesen reclamado en el plazo que al efecto se les señaló para solicitar su liquidación y abono.

Los poseedores de juros presentarán además los privilegios originales ó las diligencias ó anuncios que previene la real orden de 15 de abril de 1857.

Art. 6.º Los acreedores por vitalicios que no hayan recogido las certificaciones de renta, ó que habiendo presentado las escrituras de imposición en tiempo hábil no hubieren obtenido las certificaciones, podrán reclamarlas bajo pena de caducidad en el término de un año, á contar desde la publicación de esta ley.

Los acreedores por vitalicios que presentaron las certificaciones de renta antes del 18 de octubre de 1852 entregarán en las oficinas de la Deuda dentro de un año, á contar desde la publicación de esta ley y bajo pena de caducidad, las fes de defunción ó de existencia de los interesados por cuyas vidas se hubiesen hecho las imposiciones. Este precepto es aplicable á los que teniendo presentadas ya las escrituras de imposición no hubieran obtenido las certificaciones y á los comprendidos en el primer párrafo de este artículo.

Quedan exentos de presentar las fes de defunción los poseedores de rentas vitalicias impuestas sobre vidas de personas reales.

Art. 7.º Los créditos contra las cajas de los Consulados que estas satisficieran con el producto de los arbitrios que les estaban concedidos, y que á consecuencia de lo prevenido en el real decreto de 7 de octubre de 1847 vinieron á ser una obliga-

ción del Tesoro, podrán reclamarse, bajo pena de caducidad, dentro del término de un año, á contar desde que se publique esta ley.

Art. 8.º El Estado solo responderá de las presas inglesas de los años de 1804 y 1805, reclamadas y justificadas dentro de los plazos señalados en las reales órdenes de 22 de agosto y 22 de octubre de 1824.

Art. 9.º Los depósitos y fianzas constituidos en las arcas públicas con anterioridad al sistema de presupuestos establecido en 1828, de que hizo uso el Gobierno y que no se hayan liquidado, se liquidarán inmediatamente si se hallaran en los periódicos oficiales ó en los interesados.

Estos se presentarán á reclamar, bajo pena de caducidad y dentro del término de un año, á contar desde el citado llamamiento, la emisión y entrega de los valores que han de darse en equivalencia del capital.

Incurrirán también en caducidad los que no habiendo obtenido aun las providencias de cancelación y alzamiento de los depósitos y fianzas no soliciten el abono de sus créditos en un año, á contar desde la fecha en que se dicten las enunciadas providencias.

Art. 10. Los acreedores por alcances de cuentas anteriores á 1.º de mayo de 1828, que hayan obtenido ya los finiquitos ó certificaciones de solvencia, presentarán, bajo pena de caducidad en el término de un año, á contar desde la promulgación de esta ley, los documentos representativos de sus créditos, y solicitarán su liquidación y abono.

Para los que no los hubieran obtenido, correrá el término desde la fecha de la expedición de sus finiquitos.

Art. 11. Los acreedores por débitos del material del Tesoro comprendidos en la ley de 5 de agosto de 1851, á quienes no se hubiese entregado documento representativo de sus créditos, figurando su importe sólo en las cuentas corrientes de la Administración, deberán reclamar su abono, bajo pena de caducidad, en el término de cinco años señalado en el art. 18 de la ley de Contabilidad de 20 de febrero de 1850. Este plazo empezará á contarse desde la fecha de la misma ley si cuando se publicó figuraba ya el respectivo crédito en las cuentas de la Administración.

Para los que no se hallen en este caso se entenderán que empezará á correr desde que se consiguiera en dichas cuentas la suma que lo representa.

Art. 12. Los acreedores por depósitos y fianzas constituidos en metálico desde 1.º de mayo de 1828 á fin de diciembre de 1849, y los alcances de cuentas de la misma época que fueron objeto de la ley de 5 de agosto de 1851 y que obviaron ya la aprobación de alzamiento de las fianzas ó el finiquito de sus cuentas, reclamarán la conversión de su crédito, bajo pena de cadu-

cidad, dentro del término de un año, á contar desde la promulgación de esta ley.

Para los que no hubiesen obtenido el alzamiento ó finiquito correrá el término desde la fecha de su otorgación.

Art. 13. Se declaran caducados los créditos de la Deuda del Tesoro procedentes del personal cuya liquidación y abono no se hayan solicitado en los plazos que para los acreedores residentes en la Península y provincias de Ultramar se fijaron respectivamente en el art. 7.º del real decreto de 6 de marzo de 1868. Igualmente incurrirán en la pena de caducidad los créditos de igual procedencia reconocidos ó liquidados, estén ó no emitidos los títulos correspondientes, si los acreedores á quienes se ha hecho ya el oportuno llamamiento en los periódicos oficiales no reclaman con presentación de documentos de personalidad dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley, la entrega de los valores emitidos ó que deban emitirse en su equivalencia.

Art. 14. Se declaran también caducados los créditos procedentes de daños causados por la facción durante la última guerra civil, cuyas reclamaciones, acompañadas de la relación jurada de las pérdidas y de la información de testigos, no se hubiesen presentado en los plazos que al efecto señaló el art. 12 de la ley de 12 de abril de 1842. Incurrirán igualmente en caducidad los créditos de esta misma procedencia cuando se hubiesen extraviado los expedientes, si los interesados no acreditaron esta circunstancia y no instruyeron el nuevo expediente antes del 28 de julio de 1864, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 18 de mayo anterior.

Art. 15. La Junta de la Deuda podrá conceder prudentemente hasta seis meses de plazo á los participes en diezmos para esclarecer las dudas que, á juicio de la misma, convenga resolver al tratarse del reconocimiento del derecho á ser indemnizadas.

Luego de declarado el derecho á la indemnización, se publicará tres veces consecutivas en el Boletín oficial de la provincia donde los diezmos se percibían, con el intervalo de un mes de uno á otro anuncio, el orden declaratorio del derecho á la indemnización.

Art. 16. Los acreedores como participes en diezmos presentarán, bajo pena de caducidad, en el término de un año, á contar desde el último llamamiento, los comprobantes que la ley e instrucciones vigentes exigen para verificar la liquidación, y fijar la renta indemnizable.

El plazo que de oficio se conceda á los interesados para comprobar los hechos que la Junta estime oportuno esclarecer será á lo más el de seis meses.

Art. 17. La Junta de la Deuda hará mensualmente la declaración de

ca  
inc  
ley  
de  
cio  
tro  
te  
  
cel  
set  
du  
  
ta  
dit  
ter  
un  
pu  
la  
cio  
se  
tic  
no  
fec  
sa  
  
la  
qu  
es  
ta  
la  
  
tu  
R.  
le  
  
de  
Pr  
si  
de  
Ju  
er  
ta  
  
Ju  
m  
m  
el  
ha  
to  
  
F.  
11  
  
A  
  
á  
ler  
al  
t.  
re  
añ  
mu  
cla  
qu  
ca  
  
cal  
  
tra  
clu  
en  
pu  
rit  
al

caducidad de los créditos que hayan incurrido en ella con arreglo a esta ley, y los dará de baja en la cuenta de liquidación, haciéndose las anotaciones correspondientes en los registros, libros y relaciones en que conste el origen del crédito.

Se publicarán también en la Gaceta relaciones mensuales que expresen detalladamente los créditos recaudados en virtud de estos acuerdos.

Art. 18. Los acuerdos de la Junta declarando la caducidad de los créditos serán apelables ante el Ministerio de Hacienda durante el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación en la Gaceta de las relaciones mensuales. De las resoluciones del Ministerio podrá reclamarse ante el Tribunal Supremo de Justicia en vía contenciosa en el término de tres meses, contados desde la fecha en que se notifiquen al interesado.

Art. 19. Quedan derogadas todas las leyes, decretos y disposiciones que se opongan a las contenidas en esta ley, para cuya ejecución se dictarán por el Ministerio de Hacienda las instrucciones necesarias.

De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunicó al Regente del Reino para su promulgación como ley.

Palacio de las Cortes 10 de julio de 1869.—Nicolás María Rivero, Presidente.—Manuel de Llano y Párraga, Diputado Secretario.—El Marqués de Sardoal, Diputado Secretario.—Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.—Francisco Javier Carratalá, Diputado Secretario.

Por tanto: Mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y dignidad, que lo guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Madrid 19 de julio de 1869.—Francisco Serrano.—El Ministro de Hacienda, Constantino de Ardanaz.

### ANUNCIOS OFICIALES.

#### Ayuntamiento de San Amaro

Por el término de seis días siguientes a la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el reparto de la contribución territorial que ha de regir durante el año económico de 1869 a 70, en cuyo término los contribuyentes podrán reclamar de agravio sobre cualquier error que se haya padecido en la exacta aplicación del impuesto.

San Amaro 20 de julio de 1869.—El Alcalde, José María García.

#### Ayuntamiento de San Ciprián de Viñas

Por el improrrogable término de cuatro días contados desde el siguiente día de la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se publica el reparto de contribución territorial de este municipio con relación al año económico de 1869 a 70, durante

cuyo período se admitirán las reclamaciones que sobre el particular se produzcan y absolutamente ningunas trascurrido que sea.

San Ciprián de Viñas 22 de julio de 1869.—El Alcalde Presidente, Eusebio Villanueva.

#### Ayuntamiento de la Arnoya

Por el término de cuatro días siguientes a la inserción de este anuncio en el Boletín oficial de la provincia, se hallará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el repartimiento de la contribución territorial para el presente año económico, durante cuyo término los comprendidos en él podrán deducir de agravio lo que crean conveniente sobre cualquier error que se haya padecido en la exacta aplicación del impuesto.

Arnoya 24 de julio de 1869.—El Alcalde, José Vizo y Sánchez.

#### Ayuntamiento de Entrimo

Por término de seis días estará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el reparto de territorial, el industrial y de comercio, para que los contribuyentes puedan enterarse y hacer las reclamaciones o excepciones que crean conveniente, pasados dichos días no serán oídas ninguna clase de quejas.

Entrimo 22 de julio de 1869.—Francisco Fernández.

Esta corporación en sesión de hoy acordó aprobar a instancia de varios vecinos, se procediese a formar la estadística general de la Alcañía. Los agrimensores que deseen tomar parte en la postura, la que se rematará a favor del que mas garantías ofrezca, se presentará en esta Secretaría el día 10 de agosto en el que tendrá lugar el remate, pudiendo enterarse del pliego de condiciones que estará de manifiesto.

Entrimo 22 de julio de 1869.—Francisco Fernández.

#### Ayuntamiento de Junquera de Ambia

Terminado el repartimiento territorial que ha de regir en el año económico de 1869 a 70, según el resultado del padrón de riqueza rectificado, se hace notoria su publicación en la Secretaría de Ayuntamiento de cuatro días a contar desde la fecha.

Junquera de Ambia 25 de julio de 1869.—Trifon Rey Vasadre.

#### Ayuntamiento de Viana

El repartimiento de la contribución de inmuebles de este distrito correspondiente al año económico corriente, se hallará de manifiesto en la casa consistorial desde el 29 del mes actual hasta el 3 de agosto próximo, dentro de cuyo término se admitirán y resolverán las reclamaciones de agravios que se consideren en la distribución de cuotas, después no ha lugar.

Viana 25 de julio de 1869.—El Alcalde, Manuel Rodríguez Parga.

#### Ayuntamiento de Freás de Eiras

Terminado el repartimiento territorial que ha de servir para la cobranza de las contribuciones del año próximo, estará de manifiesto en la Secretaría de dicho Ayuntamiento desde el día 25 del presente hasta el 29, a fin de que todos los contribuyentes que se consideren agraviados por mala ó excesiva aplicación de cuota al reparto del tanto por

ciento, pueda reclamar ante esta corporación dentro del término señalado.

Freás de Eiras 20 de julio de 1869.—El Alcalde, Bonito Alonso.

#### Juzgado de paz de Cartelle

D. José María Reza y Pérez, juez de paz del distrito de Cartelle, juzgado de primera instancia de Celanova

Hago saber que por disposición del Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia del territorio, se halla vacante la Secretaría de este juzgado de mi cargo, a consecuencia de haber declarado cesante el que la desempeñaba D. Gabriel Vazquez por ser incompatible dicho cargo con el parentesco que nos une.

Lo que se hace público por este anuncio a fin de que los que se consideren aspirantes a dicho cargo, presenten sus respectivas solicitudes en este juzgado con las documentaciones correspondientes dentro del improrrogable término de quince días de publicado este anuncio.

Juzgado de paz de Cartelle 20 de julio de 1869.—José María Reza.—De su orden, Lorenzo Fernández, Secretario interino.

#### ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Anunciando subasta para la venta de pólvora superior de caza al tipo de 1 escudo 250 milésimas cada kilogramo.

Dispuesto por la Dirección general de Rentas Estancadas y Loterías en orden fecha 30 de junio último la enajenación en pública subasta de la pólvora superior de caza existente en los almacenes de esta provincia, he acordado para aquel objeto publicar el pliego de condiciones, bajo las cuales ha de tener lugar dicha subasta, y es el siguiente

Pliego de condiciones, bajo las que se sacan a pública subasta los kilogramos de pólvora de la clase superior de caza que existen en los almacenes de esta Administración y subalternas de la provincia, que aparecen a continuación:

ADMINISTRACIONES.	Núm. de kilogramos.	Lotes en que se dividirán.
La capital.....	332.500	4
Subalterna de Celanova..	20	1
Idem de Trives.....	100	1
Idem de Verin.....	24	1
Idem de Viana.....	40	1
	516.500	8

1.ª El remate de los expresados 516 kilogramos 500 gramos de pólvora superior de caza tendrá lugar a la una y punto del día 12 de agosto próximo en el despacho del Sr. Administrador, Jefe económico, a presencia de este, del de Intervención y el Escribano, previos los anuncios correspondientes en el Boletín oficial de la provincia y la fijación de carteles en los sitios de costumbre. Con iguales formalidades y en el mismo día y hora se subastarán en las subalternas las cantidades de pólvora que existan en cada una de ellas.

2.ª El indicado número de kilogramos se considerará dividido en lotes de 100 kilogramos, formando la fracción el último lote.

3.ª Los licitadores podrán hacer proposiciones a uno ó mas lotes con sujeción al modelo.

4.ª El tipo que se fija a cada lote es el de 125 escudos, debiendo desecharse toda proposición que no llegue a dicho

tipo, entendiéndose que el lote que se compra de fracción, su tipo es arreglado al número de kilogramos en que aquel consista.

5.ª Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, los cuales se presentarán en el acto de la subasta durante la media hora que precede a la señalada para su apertura, publicándose a la una su contenido por el orden que hayan sido presentados.

6.ª No se admitirá pliego a ningún licitador que en el acto ó por separado no presente carta de pago que acredite haber depositado en la Tesorería de la provincia ó en la Administración subalterna si la subasta tiene lugar en esta, la mitad del valor de los lotes a que se refiera su proposición, según el tipo señalado.

7.ª Si abiertos los pliegos, resultan proposiciones iguales en precio, será preferida la que se refiera a mayor número de lotes; y si en precio y en lotes fuesen iguales, entre sus autores únicamente se abrirá licitación verbal por espacio de cinco minutos. No haciéndose uso de este derecho, serán preferidas las proposiciones que primeramente se hubieren presentado. Respecto de las que se refieren a lotes de las subalternas, la adjudicación provisional se hará teniendo en cuenta las circunstancias ya indicadas, pero para la definitiva precederá el conocimiento del resultado que ofrecan las presentadas en las mismas.

8.ª Verificado el remate serán devueltas en el acto a los respectivos interesados las cartas de pago que hubiesen presentado, excepto aquellas que correspondan a los que resulten mejores postores, pues su importe deberá imputarse al pago de los lotes a que hubiesen hecho postura.

9.ª El acto que se estenderá del remate tendrá la fuerza de instrumento público y la firmarán los rematantes, así como la copia de dicho documento que quedará en poder del Presidente de la subasta, uniéndose la original al expediente.

10. La entrega de la pólvora no tendrá lugar hasta que sea aprobada la subasta por el Ministerio de Hacienda ó Dirección general de Rentas Estancadas y Loterías según su importancia y su valor haya sido satisfecho.

11. Dentro de los tres días siguientes al en que se hubiese puesto en conocimiento del interesado la aprobación del remate, estará este obligado a retirar de su cuenta la pólvora de los almacenes: si no lo hiciere en este plazo, se entenderá que renuncia los beneficios de aquel, y perderá definitivamente el depósito que hubiese hecho.

12. El rematante abonará además del valor de los lotes que se le adjudiquen 400 milésimas por cada envase en que esté contenida la pólvora sea cajón ó saco.

13. Serán de cuenta de los rematantes los gastos de la subasta en proporción de la parte que respectivamente se les adjudique.

14. En todo cuanto no esté previsto en este pliego se observarán las prescripciones del real Decreto de 27 de febrero de 1852 é Instrucción de 15 de setiembre del mismo año.

#### Modelo de proposición.

D...., vecino de..., enterado del anuncio y pliego de condiciones inserto en el Boletín oficial de esta provincia número... fecha... del mes... de... se obliga a tomar lotes de pólvora de la clase superior de caza existente en la Administración de... escudos... milésimas cada lote, renunciando al depósito de... escudos... milésimas que ha hecho para tomar parte en esta licitación, si no cumpliere con las condiciones del citado pliego.

(Fecha y firma.)

Orense 26 de julio de 1869.—Francisco Cejudo Pérez.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Al encargarse el Banco de España de la cobranza de las contribuciones, nombró para que la representase en esta provincia al Sr. D. José Luis Baura, jefe de Administración de primera clase; quien con fecha 16 del actual, participa a esta Administración haber designado el personal de la Recaudación en la forma siguiente:

Delegación principal.

Jefe: D. José Luis Baura.  
Interventor: D. Estanislao Carreño  
Auxiliar de libros: D. Felipe Mosquera.

Delegación del partido de Orense.

Agente: D. José Luis Baura.

PUEBLOS.

COBRADORES.

Orense.....	D. Mariano Sanchez. D. Pedro Gil Rivera. D. José Mosquera.
Villamarin.....	D. Tomás J. Feijó.
Peroja.....	D. Benito Bernardez.
Colos.....	D. Gumersindo Gonzalez.
Amoeiro.....	D. Manuel Alvarez.
Canedo.....	D. José María Balvis.
Nogueira de Ramuin.....	D. Alvaro Martinez.
Parada del Sil.....	D. José Conde. D. Maximino Perez. D. Juau Ramon Canton.
Pereiro de Aguiar.....	D. Miguel Moreiras.
Paderne.....	D. Antonio Puga.
San Ciprian de Viñas.....	D. Bernardo Iglesias.
Barbadanes.....	
Toén.....	
Merca.....	
Taboadela.....	
Allariz.....	
Junqueira de Ambia.....	
Maceda.....	
Esgos.....	
Junqueira de Espadañedo.....	
Baños de Molga.....	
Sarreaus.....	
Villar de Barrio.....	

Delegación del partido de Carballino.

Agente: D. Francisco Vazquez.

Riba-lavia.....	D. Ignacio Cacheiro.
Boade.....	D. Camilo Fernandez.
Maside.....	D. Francisco Labandeira.
San Amaro.....	D. Camilo Penedo. D. Santiago Rodriguez. D. Manuel Vazquez. D. Ramon Crespo. D. Juan Rodriguez. D. Antonio Bernardez. D. Lorenzo Perez. D. Dámaso Fernandez. D. Francisso Alvarez.
Hoborás.....	
Beiraz.....	
Abion.....	
Carballada de Abia.....	
Carballino.....	
Cea.....	
Cenlle.....	
Irijó.....	
Leiro.....	
Melon.....	
Piñor.....	

Delegación del partido de Celanova.

Agente: D. Manuel Casais.

Arnoya.....	D. Celestino Fernandez Romero.
Cortegada.....	D. Antonio Rubin, por cesion de D. Manuel Montes.
Gomesende.....	D. Benito Seoane.
Bande.....	D. Juan Alvarez.
Muñios.....	D. Andres Regente.
Lobera.....	D. Jacinto Regente.
Yerea.....	D. José Seijo.
Entrimo.....	D. Justo Rodriguez. D. Benigno Miguez.
Lobios.....	D. Juan Canedo Ferreiro.
Freás de Eira.....	
Quintela de Leirado.....	
Acebedo.....	
Cartelle.....	
Villameá.....	
Padrenda de Milvaanda.....	
Puentelavea.....	
Castro de Miño.....	
Bola.....	
Celanova.....	
Villanueva de los Infantes.....	

Delegación del partido de Ginzo.

Agente: D. Inocencio Garcia Marqués.

Callos de Raudín.....	D. Casimiro Fidalgo.
Parqueira.....	D. Lorenzo Nóvoa.
Baltar.....	

Rairiz de Veiga.....	D. Francisco Rodriguez.
Villar de Santos.....	
Ginzo.....	D. Camilo Rodriguez.
Moreiras.....	
Sandianes.....	D. José Lama.
Trasmiras.....	
Blancos.....	D. Laureano Ubis.
Castro del Valle.....	
Monterrey.....	D. Clemente Perez.
Cualdro.....	
Laza.....	D. Manuel Firvida.
Verin.....	
Oimbra.....	D. Antonio del Rio.
Villardebós.....	
Riós.....	
Gudiña.....	
Mezquita.....	

Delegación del partido de Trives.

Agente: D. Javier Canton.

Montederramo.....	D. Antonio Valearcel.
Chandreja.....	D. Angel Gonzalez Enriquez.
Teijeira y ocho parroquias de Castro Caldelas.....	D. Domingo Antonio Gonzalez.
Rio y ocho parroquias de Castro Caldelas.....	D. Manuel Gonzalez.
Puebla de Trives.....	D. José Dominguez.
Alanzameda.....	D. Salvador Fernandez.
Laroco.....	D. Cesáreo Hervella.
Viana.....	D. Simon Arias.
Villarino de Conso.....	
Rubiana.....	

Ló que he dispuesto hacer público por medio de la presente, para que sean reconocidos como tales agentes y cobradores, guardándoles las consideraciones que les corresponden, y prestándoles los Sres. Alcaldes cuantos auxilios demanden, y las instrucciones les concedan, para el mejor desempeño de su encargo.  
Orense julio 21 de 1869.—Francisco Criado Perez.

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE LA CORUÑA.

Habiendo llegado a noticia del señor Regente de esta Audiencia que no en todos los juzgados de paz del territorio eran respetados y cumplidos de un modo uniforme los aranceles judiciales respecto de la exacción de los derechos que señalan a los secretarios y porteros por los actos en que intervienen, se instruyó el oportuno expediente, y la Excm. Sala de Gobierno, con vista de los datos reunidos en él, y con el fin de que, en todo caso, no puedan aquellos funcionarios escusarse, si se estimase proceder contra ellos por haber exigido mayores derechos que los que les correspondan, ha acordado en 13 del corriente, de conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal, que se diga a dichos jueces de paz por conducto de los de primera instancia y a medio de los Boletines oficiales:

1.º Que los derechos que dichos secretarios y porteros deben percibir por los juicios de conciliación, son la mitad de los señalados en los artículos 568 al 572 inclusive, cuando el valor ó el interés de la contestación entre las partes no exceda de 200 escudos; de dos terceras partes si pasa de esta cantidad y no excede de la de 300, y los derechos íntegros en este caso, ó lo que es lo mismo, cuando el acto versa sobre cosa ó cantidad que dé lugar a un juicio de mayor cuantía.

2.º Que para señalar y exigir las dos terceras partes en los casos y diligencias de que trata el art. 582, deben regular los de los escribanos según lo mandado en el 632, ó lo que es igual, en los asuntos de menor cuantía, ó que no excedan de 200 escudos, los secretarios

deben percibir las dos terceras partes de la mitad de los asignados al escribano, que equivale a una sexta del todo; si pasan de 200 y no exceden de 300, las dos terceras partes de los secretarios han de ser con referencia a las dos que solo devenguen los escribanos; y por último, si los negocios son de mayor cuantía, en este caso, las dos terceras partes que por derecho correspondan percibir a los secretarios, son de los asignados en los aranceles de los mismos escribanos.

3.º Que se recomiende a los jueces de paz el exacto cumplimiento de las precedentes disposiciones y la puntual observancia, además del art. 630 de los repetidos aranceles, para que hagan fijar, con arreglo a él a cada secretario en su despacho un ejemplar de su respectivo arancel con las aclaraciones que, en cumplimiento del 632, van expresadas, autorizado en la forma que previene, y para que exijan irremisiblemente a los infractores la multa que la misma disposición señala, sobre todo lo cual se recuerda al mismo tiempo a los jueces de primera instancia el deber que tienen de celar y vigilar, como superiores inmediatos, que ninguno de sus subordinados, cualquiera que sea el pretexto, falte a sus obligaciones, ni que se haga la exacción de derechos de otro modo que el que va prevenido.

Y de orden de la Excm. Sala de gobierno se circula para los efectos consiguientes, debiendo los jueces de paz dar parte a los de primera instancia de quedar enterados, y los últimos al Sr. Regente del Tribunal, luego que por medio de los Boletines oficiales llegue a su respectivo conocimiento.

Coruña 18 de julio de 1869.—Luis Rivera.